

CRONICA DEL MES. MAYO Y JUNIO

El endurecimiento de la postura que la Administración Reagan adoptó en los meses anteriores respecto a Centroamérica y a El Salvador, explicitada en su discurso ante ambas cámaras el 27 de abril, suscitó de parte del FMLN una reacción de intensificación de las acciones militares. El mes de mayo se caracteriza, sobre todo, por un intenso accionar bélico, en el que la guerrilla tiene la iniciativa.

Durante el mes, el FMLN realizó por lo menos 151 acciones (26 en el departamento de Usulután, 20 en el de San Salvador, 18 en el de Santa Ana, 17 en el de Morazán, 16 en el de San Miguel y 13 en el de Cabañas), de las cuales 9 fueron de sabotaje, 8 tomas, 126 estrictamente militares (7 de ellas de ajusticiamiento), y 8 de otra índole diversa. Como consecuencia, causaron la muerte a 115 miembros de la F.A. (3 subtenientes, 5 sargentos, 5 cabos y 102 soldados), pero si se suman los paramilitares murieron 304, a los que se suman 91 heridos y otras 30 bajas, para un total de 425 "bajas" en el mes; además de 96 militares capturados por la guerrilla y liberados casi de inmediato. Al mismo tiempo, la guerrilla requisó 274 armas a la F.A., de las cuales 256 eran fusiles M—16 y otras 17 eran G-3 (83 fueron capturadas en el departamento de Cuscatlán, otras tantas en el de Cabañas, 53 en el de San Vicente y 50 en el de Morazán); asimismo requisó 20 armas pesadas de apoyo, 80.000 cartuchos de diferentes calibres, 8 radios de comunicación y una mira de rayos infrarrojos. Una compañía de paracaidistas que descendió en la zona de Guazapa fue atacada y diezmada por el FMLN y poco después se tomó la población de Cinquera causando muchas bajas a la F.A.

El sabotaje fue tal vez el objetivo principal. La guarnición que protegía el puente Quebrada Seca (San Vicente) fue atacada por el FMLN y

tras una lucha de varias horas, en la que murieron más de 40 soldados y otros 30 (un oficial entre ellos) fueron hechos prisioneros y luego liberados (contra el infundio propalado por el Departamento de Estado de que el FMLN había cambiado de táctica y asesinaba a los prisioneros), destruyó el puente, dejando incomunicada la zona oriental por la carretera panamericana. También en el litoral destruyó el puente ferroviario de Concepción Batres y otros dos menores en el departamento de Usulután, así como una máquina ferroviaria de FENADESAL. En una especie de campaña psicológica contra los caficultores de oriente, el FMLN destruyó el beneficio de café "Montealegre", en Chinameca (San Miguel), dejando una pérdida de más de 25 millones de colones, por la destrucción de las instalaciones y de por lo menos 37.000 quintales de café. Poco después atacó también los beneficios "Oromontique" y "Güalache" (Usulután). Para finalizar el mes, el FMLN atacó durante casi 24 horas la guarnición de 100 militares que defendía el centro de comunicaciones de microondas en la cumbre del cerro Cacahuatique (Morazán), punto estratégico protegido con fortificaciones concéntricas; en la madrugada del día 31, y después de haber caído muertos por lo menos 12 soldados, el oficial al mando se entregó, con otros 48 soldados, según el COPREFA, después de haber agotado el parque y de haber destruido las instalaciones, pero el FMLN dijo que recuperó 30.000 cartuchos y buena cantidad de armas ligeras y de apoyo; los refuerzos que la F.A. trató de hacer llegar fueron emboscados y tampoco la aviación pudo prestar ayuda.

Por otro lado, el FMLN anunció que el departamento de Chalatenango controlaba 26 de las 33 poblaciones, para lo que se ha creado una junta regional de gobierno y un consejo popular

local, que llevan los registros civiles, extenderán documentos, e iniciarán, entre otras cosas, campañas de acción cívica. El COPREFA se apresuró a desmentir la noticia, negando la existencia de territorios liberados y como prueba presentaba unas fotos del embajador Hinton en la ciudad de Chalatenango. Sin embargo, los viajeros de la carretera Troncal del Norte afirmaban que pasado el desvío a la cabecera departamental el territorio estaba libremente controlado por el FMLN, el cual mantenía retenes en la carretera, y no había guarniciones militares hasta la frontera con Honduras.

De parte de la F.A., en el mes de mayo, los operativos fueron de mediana envergadura y breves, presionada por la iniciativa del FMLN. Uno de ellos fue en el departamento de San Vicente, incluyendo un bombardeo de 24 horas; continuó el operativo "Salitre 10", en la zona de Guazapa, que ya llevaba casi un mes, con el revés para los paracaídas del que ya se hizo mención; en Usulután afirmó el COPREFA haber descubierto un campamento importante, pero sin mayores detalles o consecuencias; en San Salvador se realizaron acciones urbanas y rurales, en las que la Policía de Hacienda dijo haber descubierto 15 tatús; en Chalatenango, la F.A. anunció haber realizado un operativo de contención por la zona de Tejutla; y en Santa Ana se llevó a cabo una acción urbana, en la que cayó una célula guerrillera o de apoyo, con la consiguiente captura de 6 personas.

El Día del Soldado fueron juramentados 3.000 nuevos reclutas de los distintos cuerpos y batallones (apenas para reponer las "bajas" sufridas por la F.A. en los últimos meses). En su discurso, el Ministro de Defensa, General Eugenio Vides Casanova, insistió en el profesionalismo de la F.A., la unidad y la restauración de la disciplina necesaria para su eficacia, al tiempo que dio su apoyo al proceso político del gobierno; las crisis internas pasadas no se han disipado del todo, pues han dejado profunda huella en la institución, lo cual viene a agravarse por los reveses militares que está sufriendo. Por otro lado, en este mes salió el primer grupo de 175 cadetes (del total de 525) que se entrenarán en un cuartel norteamericano; en junio partirán para la base naval de EE.UU. en Honduras (Puerto Castilla) 2.500 soldados salvadoreños que serán entrenados por un equipo de 120 boinas verdes.

Como consecuencia de la guerra y de la represión, en el mes de mayo fueron muertas 503

personas de la población civil a manos del ejército, de los cuerpos de seguridad y de los escuadrones de la muerte, contra 7 a manos del FMLN. También fueron capturadas 146 personas, de las que 56 fueron ubicadas en cárceles o en cuarteles, y 90 se han dado por "desaparecidas"; frente a 6 capturadas por el FMLN (2 jornaleros y 4 agentes de cuerpos de seguridad). Se eleva otra vez la cantidad de víctimas civiles a cifras superiores a las de los últimos meses. Por otro lado, se conocieron denuncias y protestas de padres de familia, ya sea porque soldados de la fuerza aérea cometen abusos sexuales con jovencitas de El Pepeto (Soyapango), ya sea porque comandantes locales reclutan a estudiantes para después cobrarles dinero para su liberación.

En el plano político nacional se produjeron ciertos acontecimientos de relativa importancia. El 4 de mayo la asamblea aprobó la Ley de Amnistía y Rehabilitación Ciudadana, para guerrilleros que depusieran las armas y para algunos presos políticos. Días más tarde fue juramentada la comisión de amnistía, integrada por Ernesto Arbizú, Kirio W. Salgado y Mons. Freddy Delgado. Como consecuencia, comenzaron a poner en libertad a varios presos políticos, en primer lugar, a los dirigentes del FDR, a quienes se dio un salvoconducto o un pasaporte especial para salir del país. Las reacciones a la ley fueron diversas. Las organizaciones políticas de oposición la acusaron de instrumento demagógico. El diputado Mauricio Mazier (PDC) sostuvo en la asamblea que si no se ponía coto a los escuadrones de la muerte y a los abusos del ejército, no se resolvería el problema de los amnistiados; al día siguiente el Ejército Secreto Anticomunista (ESA) arrojó un cadáver de un supuesto guerrillero en el parqueo del hotel Camino Real, ante la vista de periodistas internacionales con una nota de amenaza al diputado Mazier. Mons. Rivera, en la homilía dominical, afirmó que la ley de Amnistía, aunque buena en sí, debía ser completada con otros mecanismos de respeto a los derechos humanos, y que la liberación de los presos más parecía el cambio de unos por otros, a juzgar por las nuevas capturas.

Otro de los motivos de litigio fue el de las elecciones adelantadas, las cuales enfrentan una serie de dificultades prácticas, no sólo porque no hay constitución, ni ley electoral, ni normativa alguna, sino porque tampoco existen los medios concretos para viabilizarlas. No disponen de los fondos económicos necesarios, ni en el presu-

puesto se había previsto esa posibilidad; no hay tiempo suficiente para agilizar todo lo necesario y la asistencia de tres asesores norteamericanos y la promesa de ayuda económica no bastan para lo que hay que hacer; el censo electoral es necesario, sobre todo porque se ha descubierto gran cantidad de cédulas duplicadas o multiplicadas. Los diversos miembros del CCE hicieron declaraciones contrarias, y el viaje de algunos de ellos a Venezuela dio pie a acusaciones de que el PDC quería hegemonizar el proceso. En este mismo contexto, las declaraciones de Duarte a su regreso de EE.UU. contra ciertas presiones de la Administración Reagan y su actitud militarista, reflejan no sólo su lucha por el poder, sino también las dificultades para unas elecciones apresuradas.

Fue juramentada, al fin, la comisión para la entrega de las instalaciones de la Universidad Nacional. Sin embargo, inmediatamente se encontró con dificultades insalvables, como la destrucción del patrimonio físico que requiere más de 50 millones de colones para su rehabilitación, así como los obstáculos concretos para el desalojo militar y la entrega del campus, pasos que dependen de autoridades militares que no parecen tener prisa.

Un acontecimiento de especial relieve ocurrió el día 17 de mayo, en horas de la tarde. El segundo jefe de los asesores militares norteamericanos, capitán de Fragata Albert A. Schaufelberger, responsable de la seguridad de los asesores, parece que descuidando las normas de seguridad, fue asesinado de varios balazos en la cabeza en la carretera de circunvalación de la UCA. Ha sido el primero en caer y no precisamente en combate. Días más tarde, las FPL se atribuyeron el hecho, si bien la autenticidad de las pruebas no era suficientemente clara, y aunque una de las radios clandestinas lo volvió a reclamar para ese grupo, las dudas no se han disipado del todo.

En el plano económico, el mes de mayo también ha mostrado la profundidad de la crisis. A los consabidos indicadores y a las quejas de los efectos de la situación en los distintos sectores de la vida nacional, hay que añadir el discurso del Presidente Magaña sobre la economía de guerra y sus exigencias, dirigido a lograr que la asamblea aprobara un nuevo paquete de impuestos. El déficit financiero es de tal magnitud que hay que reducir el gasto público, incluidos los sueldos, o aumentar los ingresos; pero impuestos

directos desactivarían la economía, la importación y exportación ha decrecido, y no hay más remedio que aumentar los impuestos indirectos (la deuda exterior, según declaraciones de un alto funcionario del Banco Central, superaba en diciembre pasado los 4.200 millones de colones). La asamblea se mostró remisa en discutir y aprobar el proyecto, pero al fin dejó pasar el incremento al impuesto de papel sellado y timbres, que disparó todos los precios muy por encima de lo que el aumento implicaba y originó graves protestas del público y la amenaza de interpelación del ministro de economía por la asamblea. La discusión dio pie para que se lavaran en público algunos trapos sucios, acusándose mutuamente de despilfarros y de gastos inútiles. La peor consecuencia la sufrirá el pueblo, al que además de incrementársele desmesuradamente el costo de la vida, se le amenaza con la supresión del aguinaldo de fin de año a todos los funcionarios públicos, y la posible rebaja de salarios, aunque esto último de momento parece haberse superado.

Estados Unidos suprimió casi totalmente la cuota de azúcar a Nicaragua, parte de la cual fue cedida a El Salvador, que difícilmente podrá cubrirla con la actual producción. Por de pronto, también el azúcar ha subido para el consumidor nacional. Mientras algunas empresas se ven obligadas al aumento salarial de hasta el 10% aprobado, por presión sindical, oficinas gubernamentales tienen que despedir trabajadores, como el IRA y el IVU o adeudan varios meses de sueldo a sus trabajadores. AEAS da cuenta de que desde 1979 le han destruido 800 autobuses, y la ruta 2 tiene que dejar de operar por falta de unidades. Por su parte, empresarios de oriente expusieron trágicamente la situación de esa rica zona del país, en la que el FMLN controla entre un 40 y un 75%, destruye fuentes de trabajo, e impide la siembra de algodón en dos terceras partes de lo previsto, entre otras cosas porque la carretera del litoral está en sus manos. Por último, la ANEP ha objetado algunos artículos de la nueva constitución, en cuanto se refieren a derechos concedidos a los trabajadores y a la sindicalización de empleados públicos y municipales.

En el ámbito internacional la presión de los Estados Unidos hacia el área se mantuvo o se incrementó. Una prueba de ello fue la remoción de Thomas A. Enders como Secretario Adjunto para América Latina, quien será sustituido por un personaje menos "independiente". Al mismo tiempo, se anunció también el cambio de emba-

jador en El Salvador. La Casa Blanca pretende llevar más cortas las riendas. Frente a un Congreso que denegó ayuda para operaciones encubiertas contra Nicaragua, Reagan calificó a los antisandinistas como "luchadores por la libertad", a quienes hay que ayudar, y logró la aprobación del senado hasta septiembre. Queda claro que el propósito no es impedir el envío de armas a El Salvador, sino la caída del régimen sandinista; por eso hay que ayudar encubiertamente. La postura de Kirkpatrick en el Consejo de Seguridad de la ONU fue aún más dura y clara frente a las exigencias del canciller D'Escoto, quien ofrecía diálogo bilateral y cese de las hostilidades y del apoyo a los antisandinistas. Esas posturas se reforzaron con declaraciones del general Nutting y del senador Goldwater, quienes parecen apoyar una intervención militar norteamericana en la región. Por su parte, el enviado especial a Centroamérica, Richard Stone, en sus audiencias ante el senado para aprobar su designación no dio muestras de pretender buscar un verdadero diálogo y una solución política a los conflictos. Mientras tanto, Guillermo Ungo, presidente del FDR, volvió a ofrecer en Washington el diálogo incondicional entre las partes contendientes en El Salvador y con los Estados Unidos.

Por otro lado, el grupo de Contadora no progresó en su papel negociador en la reunión que sostuvo en Panamá con los cancilleres del área, aunque aceptó enviar observadores civiles a la frontera de Costa Rica con Nicaragua. Sin embargo, parece que su tarea no sólo no está concluida, sino que tiene un futuro esperanzador, ya que a medida que pasa el tiempo recibe mayor simpatía y apoyo, tal fue el caso del Consejo de Seguridad de la ONU, los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Económica Europea, y aun la mayoría demócrata del Comité de Asuntos de Inteligencia del Congreso de EE.UU., quienes lograron que Reagan diera una aprobación formal al grupo y que Stone se pusiera en contacto con él para apoyar su gestión.

La comisión del senado aprobó por unanimidad 76 millones de dólares de ayuda militar a El Salvador para este año y la misma cantidad para 1984, mientras el Congreso sólo aprobó 65 millones para este año y para los dos siguientes, condicionados a negociaciones con el FDR-FMLN, prohibiendo el uso de fondos de contingencia, y exigiendo que 5 millones sean para ayu-

da médica y otros diez para entrenamiento militar fuera de El Salvador.

En Nicaragua la supresión del 90% de la cuota de azúcar afectará en un 60% a la empresa privada, a la que supuestamente debería ayudar la administración Reagan. Honduras, además de concertar un acuerdo con el Pentágono para readaptar una antigua base naval en Puerto Castilla, donde se entrenarán soldados salvadoreños, y también de otros países, montó una intensa campaña de posible agresión militar nicaragüense, la cual dio excusa para una mayor movilización militar y un incremento de la represión civil y política. En Guatemala el jefe del estado mayor se pronunció contra el envío del delegado especial Stone, pues lo considera como el nombramiento de un "procónsul", lo cual viola la autonomía nacional; sin embargo, el general Ríos Montt afirmó que el país aún no estaba preparado para unas elecciones; todo esto no impide el apoyo norteamericano, y el embajador en Guatemala, además de anunciar un préstamo de diez millones de dólares, sostuvo que su país no permitirá que el comunismo llegue a esa nación. Tal vez por presión de EE.UU., el gobierno anunció la destitución de unos 300 policías, algunos de ellos enviados a los tribunales, y la baja del 50% de los antiguos detectives, entre ellos el exjefe de la INTERPOL, hallado ahorcado en su celda cuando iba a ser interrogado.

El mes de mayo pone en evidencia todavía mayor cuál es el significado último de los acontecimientos en el área y en El Salvador. Se podrá afirmar en los discursos y en las posturas oficiales que se busca la paz y las soluciones políticas, pero la realidad muestra que la salida militar es la que tiene prioridad, y por eso se incrementan las acciones, se preparan nuevos ejércitos, se aprueban ayudas en armas y demás implementos bélicos y se endurecen las posiciones. Y es que, en definitiva, el que muere es el pueblo sencillo salvadoreño y centroamericano, al que no se tiene el más mínimo respeto ni se le cree sujeto de derechos.

En el mes de junio también el protagonista principal del acontecer nacional ha sido la guerra civil. Estrechamente vinculada a ella, se ha patentizado aún más la intervención norteamericana en todos los aspectos, no sólo en el militar, sino también en el político y diplomático.

El FMLN continuó con gran intensidad la ofensiva bélica que iniciara anteriormente. De las

163 acciones contabilizadas en junio, 42 fueron de sabotaje, 101 acciones estrictamente militares (25 en el departamento de Cuscatlán, 18 en el de San Vicente, 13 en el de Usulután, y 12 en los de Santa Ana y San Salvador), y otras diez diversas. En el sabotaje nuevamente la electricidad fue el objetivo principal, aunque de mayor trascendencia fueron las estaciones de microondas. Las principales poblaciones tomadas en el mes fueron Tenancingo y Monte San Juan (Cuscatlán), causando por lo menos 50 bajas al ejército y haciendo 51 prisioneros, San Luis de la Reina, San Antonio dei Mosco (San Miguel) y San José Guayabal (San Salvador); además, el FMLN tomó parte de la carretera entre San Martín y Suchitoto, destruyó el puente Las Guaras, con lo que dejó incomunicada a esta última ciudad, ejerció control en largos tramos de la carretera panamericana y volvió a dinamitar el puente Quebrada Seca, en reconstrucción, mientras el ejército realizaba el operativo en San Vicente, a escasos kilómetros de allí.

Como consecuencia del accionar militar, el FMLN habría causado en el mes de junio 40 muertes a la F.A. (1 subteniente, 3 sargentos, 2 subsargentos, 1 cabo y 33 soldados), pero si se toman en cuenta también los cuerpos paramilitares y de seguridad, serían 204 muertos, 301 heridos y 290 bajas, lo que elevaría el total de "bajas" a 795; habrían sido capturados, además, 194 efectivos, lo que elevaría casi al millar las pérdidas en hombres. Al mismo tiempo, requirió 268 armas largas, 2 cortas, 18 de apoyo, 4 radios de comunicación y más de 12 mil cartuchos y destruyó 4 vehículos militares, 5 camiones de transporte militar, un avión, y dañó un helicóptero. Las acciones en el cerro Cacahuatique, iniciadas a finales de mayo, se prolongaron varios días en junio, hasta que el FMLN abandonó el lugar, el cual fue recuperado por el ejército; pero el día 5 la guerrilla atacó y destruyó el centro de microondas El Pacayal (San Miguel), de mayor importancia estratégica militar y civil que el anterior, aniquilando la guarnición que no se fugó; días más tarde destruyó otra tercera estación de menor importancia, La Torrecilla, en el mismo departamento. Las consecuencias de la guerra son de tal magnitud en las filas del ejército, que la Administración Reagan ha enviado urgentemente 25 asesores en medicina militar para atender heridos y entrenar a los médicos locales.

Por su parte la F.A. ha intensificado también sus operativos durante el mes. Aparte de

operativos medianos y pequeños (San Vicente, Mejicanos, Santa Ana, Morazán, San Salvador), la mayoría de ellos rutinarios y permanentes, pero con escasos resultados, fuera de la destrucción de campamentos abandonados. A mediados del mes la F.A. inició un operativo nuevo y especial, del que venía haciendo amplia propaganda. El día 12 de junio comenzó el operativo denominado "Bienestar para San Vicente", con despliegue de por lo menos 6.000 efectivos, precedidos de vastos bombardeos y cañoneos al volcán Chinchontepec y a diversas zonas, y bajo la dirección del Cnel. Gólcher, quien estuvo largo tiempo en los Estados Unidos, apoyado en la 5a. brigada por una docena de asesores militares norteamericanos. El operativo es similar a los utilizados en Vietnam: primero limpian la zona de guerrilleros (de hecho no tuvieron enfrentamientos), para después llegar con acción cívica, establecer guarniciones, equipar y entrenar a la defensa civil para que la asegure, y apoyar las acciones de CONARA y de los distintos ministerios que deben colaborar en la reconstrucción cívica y social; de este tipo de operaciones, aconsejadas en el norte, dependerá en gran parte el futuro de la guerra civil. El FMLN, sabedor del plan ampliamente publicitado, se retiró, pero no dejó de atacar la retaguardia y las proximidades. El 21 del mismo mes se intentó extender el operativo al departamento de Usulután, todavía no en forma tan articulada; la F.A. dijo haber descubierto un campamento donde entrenaban niños para el FMLN y haber causado 40 bajas a la guerrilla, cosas que desmintió ésta.

No sólo las bajas, sino también otros problemas parecen estar afectando a la F.A. Por un lado, se juramentó al batallón Lenca (300 efectivos) y se creó el batallón Arce, y otros 318 cadetes salieron para entrenarse en Fort Benning; pero, por otro lado, fuentes del Pentágono sostuvieron que de los 7.000 efectivos y oficiales entrenados por EE.UU. sólo continuaban el 50%, mientras que de los 1.500 oficiales y soldados entrenados en los propios Estados Unidos únicamente el 15% estaba activo, dado que los sobrevivientes a la guerra en su mayoría se han licenciado al concluir el contrato de dos años o menos. Esto ha despertado inquietud en voceros políticos norteamericanos, pues dicen que el entrenamiento de cada soldado ha costado 9.000 dólares; por otro lado, el Departamento de Estado y el COPREFA han intensificado la campaña de que el FMLN (cosa que éste ha denegado) tor-

tura o masacre a los caídos en combate o a los prisioneros, con el fin aparente de disminuir las deserciones en las filas regulares.

Como consecuencia de la guerra y de la represión, en el mes de junio perecieron a manos de cuerpos armados 353 personas de la población civil, y otras 145 fueron capturadas (de las que la mayoría se dan por "desaparecidas"). Unos de los miembros de la Comisión de Amnistía desmintió la interpretación de Mons. Rivera, diciendo que en el segundo piso del penal de Mariona hay mucho sitio todavía; pero el incremento de las capturas refuerza la tesis del arzobispo, si es que van a parar a dicha cárcel; por otro lado, muchos de los amnistiados han salido del país, por miedo, algunos de ellos amparados en las facilidades proporcionadas por Bélgica, Canadá y Australia; otros se habrían reintegrado al FMLN, como denunció Mons. Freddy Delgado. En fin, el FMLN propuso un canje del coronel Castillo por 20 militantes capturados, poniendo un ultimátum para el día 27, pues de lo contrario sería juzgado por un tribunal revolucionario; pasó la fecha definitiva, se constituyó el tribunal, pero no parece haberse procedido. Por su parte, las FPL en los últimos días de junio ejecutaron acciones terroristas, ataques a la embajada norteamericana y, principalmente, el asesinato de René Barrios Amaya, diputado de ARENA y secretario de la asamblea, acusándolo de traidor al sindicalismo y colaborador de escuadrones de la muerte; sin embargo, acciones como esta minan la confiabilidad en el FMLN y son repugnantes en sí mismas.

Como reverso de la moneda, la intervención norteamericana en El Salvador y en el área centroamericana se intensificó. El grupo de Contadora continuó recibiendo espaldarazos, como el de la reunión de Cartagena, la declaración de Panamá de parte de la Internacional Demócrata Cristiana y varios gobiernos europeos, así como distintas fuerzas sociales y políticas al interior mismo de los Estados Unidos. Como reacción a ese posible liderazgo político y, tal vez, como una táctica de hechos consumados, la Administración Reagan ha dado una serie de pasos de gran trascendencia. A la sustitución de Enders siguió la de Hinton por Pickering. Al Congreso se le solicitó una ayuda para C.A. de más de 600 millones de dólares (145.3 de ellos para lo militar) en el presupuesto de 1984. En Honduras se habilitó la base de Puerto Castilla, con 120 boinas verdes, para entrenar, 2,500 soldados salvadoreños, y de

otros países, amparados en la petición que hiciera en Washington el general Alvarez, quien también pidió intervención directa si Honduras era atacada por Nicaragua; la decisión fue tomada sin autorización legislativa y, ante algunas protestas de voceros políticos, la asamblea, rodeada militarmente, decidió tras las explicaciones del general Alvarez, aprobar la instalación de la base. Frente a la expulsión de Nicaragua de tres diplomáticos norteamericanos acusados de conspiración, el gobierno de Washington cerró todos los consulados nicaragüenses en EE.UU., expulsó a 21 diplomáticos y sus familias, y sólo dejó abierta la embajada en Washington. El embajador especial, R. Stone, inició una gira por el área (sin darse por enterado de la carta que le envió el FDR-FMLN pidiéndole dialogar), pero en Nicaragua adoptó una postura poco diplomática y, menos aún, mediadora. El tribunal supremo de los EE.UU. decidió suprimir el veto legislativo, por lo que en adelante no se requerirá la certificación semestral para continuar la ayuda. Para concluir el mes, dos periodistas norteamericanos que viajaban cerca de la frontera, en territorio hondureño, murieron a consecuencia de una explosión; inmediatamente la cancillería hondureña, orquestada por voceros oficiales norteamericanos, acusó a Nicaragua de haberles disparado un proyectil, cosa que desmintió la cancillería de ese país, argumentando las contradicciones en los distintos comunicados oficiales hondureños y la imposibilidad de la acción de parte de Nicaragua.

En otra vertiente internacional, Willy Brandt se pronunció contra la política de EE.UU. en El Salvador y Nicaragua. La Internacional Demócrata Cristiana, reunida en Panamá, se pronunció por el diálogo y apoyó a Contadora. El presidente del gobierno español, Felipe González, quien ya en Cartagena sostuvo que la crisis centroamericana era de origen interno, en su visita a Washington reafirmó esa misma postura y abogó por soluciones pacíficas apoyando a Contadora. La AFL-CIO se opuso al plan Reagan para la Cuenca del Caribe. El ex-presidente Carter denunció al gobierno salvadoreño como el más criminal del hemisferio y criticó acremente la política de Reagan. Altos representantes de los dos partidos políticos estadounidenses están presionando para que Reagan nombre una comisión bipartidista que le asesore en su política para el área.

En esta vorágine intervencionista se eclipsan

los problemas particulares de cada nación. Solamente Nicaragua es la que día a día sufre las consecuencias del estrangulamiento militar y económico, mientras Honduras hunde cada vez más su dignidad nacional ante las exigencias imperiales, apoya descaradamente a la contra-revolución y madrugaba para denunciar cínicamente violaciones de su vecino. Costa Rica procura mantener una mayor autonomía, sobre todo después de la misión de vigilancia en la frontera por parte de Contadora, aunque su territorio sirve de base para Pastora y su ejército. En Guatemala se cierra el mes con un intento de golpe de Estado, sofocado de momento tras muchos cambios en la cúpula militar y la destitución del general Vielman que se atrevió a criticar a Ríos; la última pastoral de los obispos, que criticaba la militarización del país, el enrolamiento obligatorio de los indígenas en la defensa civil, y la agresividad de algunas sectas protestantes, renovó las tensiones de la Iglesia católica con el gobierno, disimuladas oficialmente, y en forma transitoria, con la defunción y los funerales del cardenal Mario Casariego.

En el ámbito estrictamente nacional, los problemas parecen casi provincianos. Prosigue el debate y las opiniones encontradas sobre la fecha de las elecciones. La Cámara de Comercio e Industria publicó una nota saludando a Stone y dándole consejos. D'Aubuisson apareció en TV pidiendo la unidad de todos los partidos y el apoyo a la F.A., lo cual hizo sospechar que la guerra no va por buen camino, de acuerdo a sus intereses. Se da a conocer que ya está concluido el proyecto de Constitución, pero hay vacíos en los que no se ha logrado consenso, los artículos relativos a las reformas (104-105) originaron una polémica fuerte entre las distintas posturas políticas, pues el presente y el futuro de la reforma agraria están en juego. Probablemente este punto es el que origina una serie de publicaciones en las que la empresa privada y Duarte se tiran de los pelos y se acusan mutuamente de los males del país, como anticipando la lucha por el poder y por la constitución.

El suceso más relevante fue el viaje a EE.UU. del Presidente Magaña y una numerosa comitiva, y la visita de Stone a El Salvador. De esta última es poco lo que aún se sabe, aparte de declaraciones conjuntas y palabras que no siempre reflejan la realidad de lo tratado o negociado. Magaña viajó a Washington en un avión que le mandara el gobierno Reagan y, además,

de entrevistarse con él, se reunió con los comités de relaciones exteriores de ambas cámaras, deseados de conocer la situación militar, política, económica, de derechos humanos y del enjuiciamiento a los asesinos de ciudadanos norteamericanos, antes de tomar una decisión sobre la renovación de la ayuda a El Salvador. Ambos presidentes hicieron frente común de apoyo contra la actitud renuente del Congreso, y Magaña insistió en la dificultad de salvaguardar los derechos humanos, así como en la tesis de que en El Salvador se juega el destino de occidente y la seguridad de los EE.UU. En su discurso ante la OEA, Magaña insistió en las mismas tesis del enfrentamiento este-oeste, de la subversión comunista, y repitió la frase "no tenemos nada que vengar, nada que reprimir, nada que negociar", la cual hizo eco a la postura del Departamento de Estado y de Stone quienes rechazaron el llamado del FDR-FMLN a negociar, mientras Long apoyaba esta petición y prometía hacer lo posible por lograr el diálogo entre las partes. A su regreso a El Salvador, Magaña declaró que la Administración Reagan aumentaría la ayuda al ver el esfuerzo sincero en la pacificación, que no había encontrado oposición clara en los representantes de las cámaras, aunque había percibido el poder de las asociaciones religiosas para mover la opinión pública contra El Salvador, a pesar de la lucha contra el totalitarismo extracontinental, y que dejó en claro que no tenía autorización para negociar el poder, pues las elecciones eran la solución política a la cual tiene que acogerse la izquierda revolucionaria.

En el aspecto económico, la crisis se sigue agudizando. Los precios no se detienen, amparados en el impuesto al papel sellado y timbre, hasta el punto de que se concretó la interpelación al ministro de economía por parte de la asamblea, pero más que una interpelación fue un discurso entre amigos y vagas promesas de control. Mientras tanto, que en la zona franca de San Bartolo se hayan dañado miles de toneladas de alimentos regalados para refugiados y desplazados, suscitó una ola de reclamos y acusaciones-justificaciones. Hay maestros que no han cobrado todavía sus sueldos desde hace cinco meses y se produjeron esporádicamente conflictos laborales por despidos o por reclamos de aumentos salariales. PROCANA se pronunció por un retorno a la situación anterior, dando marcha atrás a las reformas para buscar una solución económica eficaz. Por un lado, hay repetidas quejas de

escasez de viviendas, y por otro, las que han sido construidas por encargo del Fondo Social para la Vivienda no pueden ser habilitadas porque esa institución carece de capital para ponerlas a disposición una vez cancelado su costo a los constructores, que uno tras otro van quebrando al no tener con qué pagar sus créditos bancarios.

El mes de junio, con más claridad quizá que otros, hace resaltar cuáles son los intereses primarios y las principales líneas de acción: una intransigencia absoluta de la Administración Reagan frente a Nicaragua y a los movimientos re-

volucionarios de la región, que condiciona todas las medidas que se toman en los distintos aspectos de la realidad social, principalmente la intensificación de la guerra en Nicaragua y El Salvador, y la preparación para una campaña militar prolongada. Los intereses nacionales, los derechos humanos y todos los demás principios y valores occidentales y cristianos son completamente secundarios.

Eugenio C. Anaya, h.

